

otras muchas extralimitaciones de facultades sugeridas por aquel funcionario, seguramente no le habria prestado su apoyo en este caso.

§ 138. Lo ha hecho, sin duda, inducido por el comisionado americano en el error de que la reclamacion referida es la que se formuló en Diciembre de 1870, no siéndolo, conforme á la Convencion, sino la presentada en 30 de Marzo de ese año, esto es, no la en que se ha pretendido el reparto de réditos del fondo en cuestion conforme al decreto de 24 de Octubre de 1842, sino la en que se pidió el fondo mismo alegándose que la iglesia reclamante fué despojada de él.

§ 139. Descubierto este grave error cuando todavia la decision dictada en virtud de él no tiene el carácter de final é irrevocable, porque no han terminado aún los procedimientos de la Comision, debe ser enteramente corregido, declarándose que por no ser de la competencia de este tribunal la reclamacion referida á él, en el presente caso, debe quedar entre las desechadas por igual causa.

§ 140. Pero apenas puede esperar el que suscribe, aunque así lo pide en justicia, que despues de emitida una opinion sumamente favorable á la iglesia reclamante y "para beneficio no solo de los idólatras por convertir sino de los habitantes de la Alta California y de todo el pueblo de los Estados-Unidos," se consienta en revocarla completamente.

§ 141. Por esta consideracion se ve precisado el que

suscribe á sugerir un punto de vista por el cual ya que no de conformidad con el texto de la Convencion que, de ningun modo puede servir de apoyo á las pretensiones de los reclamantes, acomodando siquiera el espíritu de ella á la voluntad de atender á tales pretensiones, se combine en lo posible el carácter de la decision con el de la reclamacion legalmente presentada.

§ 142. El Arbitro ha formado la opinion de que es moralmente justo que el fondo de misiones se invierta en sus objetos conforme á la mente de los que lo crearon: que una parte de esos objetos debe cumplirse en la Alta California; y que las autoridades eclesiásticas son las más á propósito para encargarse de invertir la parte del fondo correspondiente á esa demarcacion, sin que la circunstancia de que la Alta California dejara de formar parte de la República Mexicana haya perjudicado en modo alguno su derecho á participar del fondo. Una vez formado este juicio, contra la opinion del comisionado mexicano, el Arbitro vió en la opinion del comisionado americano formulada la cuestion en estos términos:

"La cuestion versa sobre la *cuantía de los productos del fondo* que ha de aplicarse á cada una de las Californias, y sobre el monto total de esos productos."

Y tomando, de buena fé, tal cuestion como la referida á este tribunal por los gobiernos que lo crearon, buscó la forma correspondiente á ella para consignar su opinion en el sentido expresado.



§ 143. Ciertamente no puede creer el que suscribe que el Arbitro haya formado el juicio de que el Gobierno de México ha estado civilmente obligado á remitir cada año, el dia 24 de Octubre, determinada cantidad á los obispos de California, en virtud de un decreto que no lo dispone así, y sin que previamente se determinara cuál debia ser la parte que del fondo de que se trata correspondia á la Alta California, y ni aun siquiera si á alguna tenia derecho despues de su segregacion de México.

§ 144. No, semejante obligacion no ha podido crearse sino por medio de inducciones y sobre la base de que desde el 30 de Mayo de 1848 estaba hecho el reparto que en Diciembre de 1870 vinieron á solicitar los reclamantes. Al afirmarlo así el que suscribe, tiene la más plena seguridad de no poder ser contradicho.

§ 145. Por decreto de 8 de Febrero de 1842, se retiró del obispo de Californias el encargo de administrar é invertir en sus objetos el fondo de misiones, y en 24 de Octubre de ese mismo año, cuando ya no tenia dicho obispo tal encargo, al mandarse vender los bienes del fondo, se dispuso simplemente que la direccion de la renta del tabaco que quedaba hipotecada al pago de los réditos al 6 por ciento sobre el capital á que se referia el decreto, entregaria *las cantidades necesarias* para cumplir los objetos á que estaba destinado el fondo.

§ 146. Para declarar que *conforme á esta disposicion* ha estado obligado el Gobierno de México á remitir á

los reclamantes cada año, desde 1848, la cantidad de \$43,080 99 cs., son necesarias las siguientes inducciones.

1.<sup>a</sup> Que ó por el decreto de 24 de Octubre expedido "*para dar cumplimiento* al de 8 de Febrero del presente año, que dispuso volviera á continuar el Supremo Gobierno al cuidado y administracion del fondo piadoso de Californias como lo habia estado anteriormente se derogó ese decreto de 8 de Febrero de 1842, en la parte en que retiraba del obispo de Californias la administracion del fondo á que se refiere; ó que tal decreto (el de 8 de Febrero) fué enteramente nulo y de ningun valor por importar la violacion de un contrato celebrado con la Santa Sede en 1836, como en 1859 lo alegaron los reclamantes.

2.<sup>a</sup> Que donde el decreto de 24 de Octubre dice simplemente "*la direccion del ramo (de tabaco) entregaria las cantidades necesarias* para cumplir los objetos del fondo," debe entenderse que ordena que *cada año* en la fecha del decreto, se entregarian al obispo de California *todos los réditos* del capital del fondo.

3.<sup>a</sup> Que aunque por el mismo decreto, la hacienda pública solo debia quedar reconociendo al rédito de 6 por ciento *el total producto de las enajenaciones* que se hicieran conforme á él, de las fincas y demas bienes del fondo piadoso de las Californias, por el capital que representaban al 6 por ciento de sus productos, es de entenderse por capital del fondo para los efectos del



mismo decreto, el valor aparente de las fincas, bienes y créditos del fondo y el de los réditos no pagados sobre estos créditos.

4<sup>a</sup> Que ó el mismo decreto disponia que la mitad de los créditos por pagar, se destinara á la Alta California, ó que al segregarse esta de México se determinó que esta parte le correspondia y deberia seguirse abonando á sus autoridades eclesiásticas.

§ 147. Ya se ve que en esta serie de inducciones y suposiciones, entra por mucho la conviccion moral de que el obispo de Californias tuvo siempre el derecho de administrar el fondo en cuestion, y para nada el texto del decreto que se trata de aplicar, y menos el del de 8 de Febrero de 1842, para cuyo cumplimiento fué aquel expedido.

§ 148. El Arbitro ha hecho en apoyo de su opinion las siguientes observaciones: "Ni el gobierno español ni el mexicano pretendieron nunca que los productos del fondo *no fueran á parar á manos* (were not finally to find their way into the hands) de las autoridades eclesiásticas, ó que fueran aplicadas á objetos distintos de los que los donantes habian señalado. Despues del decreto de 24 de Octubre de 1842, el Gobierno mexicano reconoció el adeudo y la obligacion en que se hablaba de remitir los productos del fondo al obispo de Californias con el hecho de expedir órdenes en favor de este sobre la aduana de Guaymas."

No cree el que suscribe que estas observaciones sean

otra cosa que inducciones supletorias á falta de una obligacion positiva. Respecto á la primera ocurre que ciertamente no es lo mismo no oponerse á que una cosa vaya á parar á manos de determinada persona, que el estar civilmente obligado á remitírsela, y en cuanto á las órdenes expedidas á favor del obispo (una sola de las cuales ha podido ver el que suscribe en copia impresa en uno de los alegatos de la parte reclamante) lo único que ellas pueden probar, es que alguna ó algunas veces se mandó que al obispo de Californias se hiciera la entrega de determinadas cantidades, pero no que se adicionara en la simple forma de órdenes el decreto de 24 de Octubre de 1842, ni menos que se derogara por el mismo medio el decreto de 8 de Febrero de ese año, que revocó la parte final de la ley de 1836 y devolvió al Gobierno la administracion é inversion del fondo, como lo ha consignado el Arbitro en su decision.

§ 149. La última induccion hecha en ella, de la obligacion del gobierno de México de remitir los bienes del fondo al obispo de Californias, es la siguiente: "Tal obligacion está reconocida tambien por la ley del Congreso, de 3 de Abril de 1845, en que se dispone la devolucion al obispo de Californias y á sus sucesores, de todos los créditos y propiedades pertenecientes al fondo piadoso que no se hubiesen vendido para los efectos expresados en la ley de 29 de Setiembre de 1836, sin perjuicio de lo que el Congreso pudiera resolver respecto de los bienes que se hubiesen vendido ya."

Leyes y decretos.—Tomo XXVI.—Apéndice.—27.



§ 150. No vé el que suscribe cómo pueda darse por reconocida otra cosa en esta ley, que el hecho de haberse vendido bienes pertenecientes al fondo de misiones. Fuera de esto no hay sino la declaracion de que en *lo sucesivo* sería el obispo de Californias quien administrara los bienes no vendidos del fondo, poniéndose al efecto de nuevo en vigor la parte relativa de la ley de 1836, que habia sido revocada en Febrero de 1842. Así, pues, léjos de reconocerse que el obispo de Californias habia debido recibir los productos del fondo, como legalmente encargado de su inversion desde 1842 hasta 1845, se hace patente que no habia tenido tal encargo *por la ley* durante ese tiempo, pues á haberlo tenido, no se habria creido necesario restablecerlo en él, citando la ley que una vez se lo habia conferido y que habia sido *formalmente* revocada en esta parte en Febrero de 1842, y *nunca antes del 3 de Abril* de 1845, puesta de nuevo en vigor en la forma necesaria, á saber, en la de ley ó decreto.

§ 151 Al exponer así el que suscribe el tenor de la ley de 3 de Abril de 1845, no es su ánimo censurar en modo alguno la interpretacion del Arbitro, sino únicamente demostrar que esta, lo mismo que las observaciones en igual sentido ántes mencionadas, tienen por base, no los antecedentes *legales* del asunto, sino una conviccion moral; no la subsistencia de una ley en que se confiriera al obispo de Californias el encargo de administrar é invertir en sus objetos el fondo de misiones

sino la creencia moral de que ese obispo era la única persona á propósito para tal encargo.

Porque, hay que repetirlo, por la ley escrita, buena ó mala, estaba separado de él en 24 de Octubre de 1842, y no dejó de estarlo sino desde el 3 de Abril de 1845.

§ 152. Indudablemente para un tribunal, no del foro interno ó de conciencia, sino del externo ó civil, no hay en el presente caso otra ley que atender que la de 3 de Abril de 1845, ni otra obligacion positiva que hacer cumplir de parte del Gobierno de México para con el obispo de Californias y sus sucesores, que la de devolverles los bienes del fondo de misiones no vendidos en esa fecha.

§ 153. Si, pues, esta Comision no es un tribunal del foro interno, y no ha de hacer efectiva en este caso una obligacion moral del Gobierno demandado, como justamente ha rehusado hacer efectivas todas las del mismo carácter en otros casos, lo único que puede declarar es si la Iglesia reclamante en su calidad de ciudadana de los Estados-Unidos, tiene el derecho de pedir el cumplimiento de aquella ley, y qué parte debe entregársele de los bienes del fondo á que la misma se refiere.

§ 154. De este modo se decidiria la única reclamacion referida á este tribunal que, aunque exagerada como todas, á pesar de proceder de personas piadosas, no puede considerarse sino como la pretension de que se asigne á la Iglesia Católica de la Alta California, la



parte que legalmente pueda corresponderle del fondo de misiones. Los reclamantes pidieron *todo* el fondo y todos sus productos anteriores. A la Comision toca (si se cree competente,) decidir conforme al art. III de la Convencion, qué parte de la reclamacion debidamente hecha, comunicada y sometida, ha de tener éxito para los interesados, es decir, qué parte del fondo ha de serles entregada.

§ 155. Pero tambien conforme á la Convencion es preciso que en interes de los dos gobiernos que la celebraron, y en consecuencia con el espíritu con que fué ajustada, el caso se decida de una manera completa, perfecta y final, teniendo en cuenta que "la reclamacion presentada en él y referida á la Comision, se considerará y tratará, concluidos los procedimientos de ella, como finalmente arreglada, desechada y para siempre inadmisibile."

La reclamacion sentada en este caso ántes de la Convencion, y despues dentro del término por ella señalado, y por consiguiente, la referida á la Comision, es sobre entrega del fondo, y concluidos los procedimientos de la Comision, se deberá considerar por los dos gobiernos interesados como inadmisibile para siempre á pesar de la vana reserva hecha por los reclamantes al fin de su memorial; ó más propiamente nueva reclamacion, de 28 de Diciembre de 1870.

§ 156. Pero si subsistiere la decision pronunciada, los reclamantes pretenderán probablemente darle un

efecto permanente, alegando que por ella se les ha declarado con derecho á percibir determinada anualidad.

El Gobierno de México, que no puede creerse obligado á otra cosa conforme á la Convencion, que á pagar la cantidad que por saldo resulte en su contra liquidado que sea el importe de las indemnizaciones asignadas expresamente á los reclamantes de uno y otro país, rehusará, sin duda alguna, dar á la decision efecto alguno, por tiempo posterior al 24 de Octubre de 1868; y habrá que discutir de nuevo la cuestion de si el decreto de 24 de Octubre de 1842 da á la Iglesia Católica de Alta California el derecho de percibir anualmente \$ 43,080 99 cs. ú otra cantidad cualquiera.

§ 157. Notorios son al mundo los inmensos sacrificios que ha costado al pueblo mexicano sacudir el yugo eclesiástico en su propio territorio. ¿Cómo, pues, recibiria las pretensiones de constituirlo en tributario perpetuo de una iglesia extranjera? ¿Serian ellas á propósito para "mantener y ensanchar los sentimientos amistosos entre la República Mexicana y los Estados-Unidos," que fué el objeto con que el gobierno de estos países celebraron la Convencion de 4 de Julio de 1868?

Lo contrario ciertamente, y por esto ha dicho el que suscribe que debe decidirse el presente caso en consonancia con el espíritu de la Convencion, es decir, sin dejar motivos ó pretextos para nuevas reclamaciones.



## V.

§ 158. Adoptado el punto de vista que (solo por la razon expuesta en el § 140) propone el que suscribe para la decision de este caso, hay que determinar cuáles son los bienes del fondo en cuestion de cuyo valor deba asignarse una parte á la Iglesia reclamante conforme á la ley de 3 de Abril de 1845.

§ 159. Ella dispuso que se devolvieran inmediatamente al obispo de California y sus sucesores los créditos y demas bienes del fondo piadoso que existian invendidos; mas como no se hayan designado los que entonces estuvieran ya vendidos, supongamos que el Gobierno contrajo el compromiso de devolver todos los créditos y bienes del fondo en el estado que tenian cuando los entregó el apoderado de dicho abispo á virtud del decreto de 8 de Febrero, por el cual fué separado del encargo de administrarlos é invertirlos en sus objetos.

§ 160. Respecto á los productos que habian rendido tales créditos y bienes durante el tiempo que el gobierno los tuvo á su cargo, si él no los invirtió en sus objetos nadie tenia derecho de pedirle cuenta de ellos.

§ 161. Supongamos, además, que ningunos bienes ni créditos contra particulares se devolvieron al obispo de California, y examinaremos únicamente el punto de

devolucion en lo relativo á créditos contra la hacienda pública.

§ 162. ¿Qué era lo que debia devolversele respecto á ellos? No ciertamente las cantidades que importaban sino los títulos que los representaban, esto es, el derecho de cobrarlos. Así como la devolucion de un crédito particular, por ejemplo, el de \$ 13,997 que se habian comprometido á pagar al fondo los fiadores de D. Ramon Vétiz, no se habria hecho entregando al obispo esa suma adeudada, sino entregándole la escritura otorgada por dichos fiadores en 8 de Febrero de 1842, así tambien la devolucion de los créditos contra el Erario debia hacerse entregando los títulos de ellos.

§ 163. Pero en la instruccion ó inventario con que entregó los bienes del fondo al apoderado del obispo, hallamos la siguiente nota: "De estos créditos (contra la hacienda pública) solamente he podido recoger hace pocos dias la escritura del capital de 162,618 pesos 3 reales 3 granos que recibió el consulado; de los demas solo consta que se pagaban los réditos por la Tesorería general, y por los libros que llevaba se podrán acreditar estas partidas." Resulta, pues, que solo uno de los créditos estaba representado por un título trasmisible; los otros no tenian más título que su inscripcion en el libro de la deuda pública.

§ 164. ¿Cómo, pues, podia hacerse la devolucion de esos créditos? Pura y simplemente por efecto de la ley ó *ipso jure*. Desde el momento en que se dispuso que



se devolvieran *inmediatamente* al obispo de Californias los créditos contra la hacienda pública, debía entenderse que se le devolvía el derecho de cobrarlos; que se le transmitían los títulos necesarios al efecto. Al ocurrir á la tesorería á gestionar el pago de réditos no habría tenido que presentar otro título que la ley que le había devuelto los créditos, aun respecto al único escriturado; pues bastaba que perteneciera al fondo para que en virtud de esa ley tuviera el obispo de Californias la personalidad legal necesaria para aquel efecto.

§ 165. Así es que no por una simple suposición sino conforme á derecho, deben considerarse como devueltos al obispo de Californias el día 3 de Abril de 1845, en virtud y por efecto inmediato de la ley de esa fecha, todos los créditos del fondo piadoso contra la hacienda pública; quedando enteramente cumplida en esta parte dicha ley, y el precitado obispo en posesión de esos créditos.

En consecuencia, nada se puede conceder á los reclamantes respecto á ellos *conforme* á dicha ley, porque lo único que podrían pedir como sucesores del obispo de las Californias, él mismo lo obtuvo.

§ 166. Pero el fundamento de su pretensión respecto á créditos del fondo contra la hacienda pública, es distinto del de lo demás de su reclamación. En su "Breve historia del fondo, &c., presentada en 31 de Diciembre de 1870 como anexo de la nueva demanda que hicieron pasar como memorial, se lee lo siguiente:

"En la expresada venta (la hecha en virtud del decreto de 24 de Octubre de 1842) los créditos activos del fondo contra el Gobierno por razón de préstamos, *no fueron comprendidos*. . . . . Algunas de estas deudas (las más cuantiosas por cierto) eran anteriores á la separación de México del dominio de España; pero *como eran deudas del vireinato de Nueva-España se asumieron y reconocieron como deudas de la República Mexicana así por la ley de 28 de Junio de 1824 como por el artículo 7º del tratado de 28 de Diciembre de 1836 entre México y España*. El interés de este capital se debe *por tanto* (must therefore) añadir al del producto de la venta al determinarse el importe de los réditos vencidos y todavía no pagados por México al fondo piadoso." (página 6.)

Pretenden, pues, los reclamantes que la Comisión condene al Gobierno de México al pago de una parte de la deuda pública simplemente *porque por una ley y por un tratado se reconoció deudor de los créditos contraídos por el vireinato de Nueva-España*.

§ 167. Para hacer más perceptible el carácter de esta reclamación conviene individualizarla como se ha hecho con la otra en el § 134.

El Juan Fernandez á quien allí se tomó por ejemplo, presenta la siguiente demanda:

"Mis antepasados poseían cuantiosos bienes en México en tiempo en que era colonia española. Los vireyes les exigieron varios préstamos para atender á los